

El “rescate” de Chipre podría considerarse una parábola de la deriva hacia el naufragio de la Unión Europea, si no fuera porque es verdad. Todo lo que ha ocurrido desde la primera decisión del Eurogrupo hasta el Plan B finalmente aprobado en la madrugada del 25 de marzo (y que sin duda será seguido, tras su seguro fracaso, de un Plan C dentro de unos meses) desnuda a las instituciones de la UE y a la UE como tal, pese a afectar solamente de manera directa a un pequeño país, de influencia política marginal, y a que la “ayuda” europea parece que va a ser de 10.000 millones de euros, una cifra muy inferior a los “rescates” anteriores. Por eso, la importancia de lo que ha ocurrido en Chipre tiene que ver más con la política, incluyendo la dimensión simbólica de la política, que con la economía. Así tenemos a un paraíso fiscal que se incorpora a la UE en el año 2004 con pleno conocimiento de causa de los países miembros; no es el único, porque ya estaba allí uno de rancio abolengo: Luxemburgo, pero sí tiene características específicas. No hay que olvidar, entre ellas, que Chipre estaba entonces, y lo ha estado hasta febrero de 2013, gobernado por el PC local (que, como ha recordado Francisco Louça, mantiene relaciones “internacionalistas” con el PC griego y con el PC portugués; nada indique que termine aquí la lista...) y que el principal beneficiario del “paraíso” han sido oligarcas rusos, que han utilizado el megasistema bancario de la isla para lavar rublos por euros y beneficiarse de ínfimos impuestos sobre el capital. No parece anecdótica esta vinculación entre gobierno PC/inversores rusos. De hecho, dirigentes del partido, actualmente en la oposición, han propuesto un “rescate” ruso como más beneficioso y “patriótico” que el europeo... utilizando como garantía los importantes yacimientos de gas del país. Pero Putin ha respetado el reparto de “zonas de influencia” y se ha limitado a protestas formales, dejando hacer a la UE.

El impacto político-simbólico del “rescate” ha estado especialmente en las medidas del Plan A que confiscaban un porcentaje de todos los depósitos bancarios como aportación a los 7.000 millones de euros que la UE exigía al país a cambio de su “ayuda”. La medida fue rápidamente rectificada, en lo que se refiere a los depósitos inferiores a 100.000 euros, pero ha dejado una sombra de amenaza futura, por más que se proclame ahora el carácter “sagrado” de ese tope. La posibilidad de que *todos* los tenedores de depósitos contribuyan a futuros “rescates” ha entrado a formar parte del repertorio de la troika y podría llegar a utilizarse en condiciones más propicias, si no encontrara un rechazo social con fuerza suficiente. Por otra parte, nadie puede imaginar que si los depósitos de más de 100.000 euros estuvieran en manos mayoritariamente, pongamos por ejemplo, de inversores alemanes, éstos habrían cargado con el peso fundamental de la “quita”. De hecho, los bancos extranjeros que operan en el país, entre ellos varios de los principales bancos europeos no han sido afectados por las medidas. Es una apo-

teosis del cinismo que, a estas alturas del partido, Merkel haya tenido la desfachatez de felicitarse porque *“paguen quienes contribuyeron a causar los problemas”*. En fin, aunque la “quita” sobre los depósitos bancarios no haya afectado, por el momento, a la mayoría de los ciudadanos chipriotas, éstos sí son víctimas de un “corralito” cuyo monto y duración está por ver, y sufrirán además las consecuencias generales de la durísima recesión económica que traerá consigo el “rescate”. El FMI, que parece ser el autor intelectual del Plan B, debe sentirse a sus anchas en esta importación europea de los desastres sociales que protagonizó hace unos años en América Latina.

La guerra de Mali y la intervención de tropas francesas en ella han creado un conflicto extraordinariamente complejo, que se resiste a ser comprendido con los esquemas antiimperialistas tradicionales, y ha generado debates con opiniones contradictorias en la izquierda francesa, incluyendo a la izquierda alternativa. Hemos publicado bastantes textos, con diversos puntos de vista, en nuestra web. El análisis de **Jean Batou** aporta un enfoque de conjunto en el que las opiniones se basan en un buen conocimiento de los hechos y de la historia del país. El II Congreso del NPA parece haber significado el inicio de una nueva etapa tras la grave crisis que el partido ha venido sufriendo. **Josu Egireun** analiza desde dentro, sin paños calientes, los problemas y posibilidades tras esta salida del bloqueo.

Los resultados de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre hacían prever una situación política inestable. El desarrollo de los acontecimientos ha ido mucho más allá de cualquier previsión. **Josep Maria Antentas** escribe un segundo capítulo tras el análisis de las elecciones que publicamos en el número 125. Concluye con buenas razones que: *“El reto es llegar a articular un nuevo instrumento amplio, plural y unitario que aspire a ser mayoritario, pueda articular política y electoralmente a la mayoría social opuesta a los recortes y partidaria del derecho a decidir y tenga una orientación programática y estratégica y una práctica cotidiana lo más rupturista posible y un proyecto de cambio social lo más avanzado y desarrollado posible”*.

José Ramón Castaños, Joseba Barriola y Joxe Iriarte escriben unas primeras opiniones y valoraciones sobre el Congreso de Sortu, basadas en análisis detallados de sus documentos.

Isabel Serra Sánchez y Pablo G. Perpinyà desarrollan una crítica de las nuevas recetas neoliberales para sojuzgar a la juventud.

El descubrimiento de que el asesino de Yolanda González está a sueldo (“sigue” habría que decir) de la policía y la Guardia Civil ha reabierto una herida que está en la memoria y el corazón de una generación de militantes revolucionarios. **Jesús Jaén, Javier Cerdón y Marcelino Fraile**, que fueron sus amigos y camaradas, recuerdan a Yolanda con una emoción indignada. *M.R.*